



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05129-00
Accionantes: DAVID ZURISADAY OYUELA ORTIZ Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Tema: Inadmite tutela.

AUTO

1. El señor Ricardo Andrés Rodríguez Novoa, actuando en calidad de apoderado judicial de los señores David Zurisaday Oyuela y otros¹ instauró acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Tolima. Con la solicitud de amparo pretende la protección del derecho fundamental al debido proceso de sus poderdantes.
2. La anterior trasgresión constitucional se las adjudica a las providencias judiciales del 23 de mayo de 2024 y del 8 de abril de 2025 proferidas por la autoridad judicial accionada. En tales autos se declaró probada la excepción de caducidad del medio de control en sede de apelación y se rechazó por improcedente el recurso de reposición y súplica interpuesto en contra de la anterior².
3. Una vez revisado el escrito de tutela, no se advierte que el señor Rodríguez Novoa hubiera allegado el poder especial que lo faculta para ejercer la representación de quienes alega como accionantes al interior de la presente acción constitucional.
4. Al respecto, se recuerda que, en materia de tutela contra providencia judicial, la Corte Constitucional ha señalado:

(...) la falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder específico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acción de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimación por activa³.

¹Yeni Claritza Saavedra Rondón, Shirel Daniela Oyuela Saavedra, Sahily Gabriela Oyuela Saavedra, Juan Martín Oyela Saavedra, Catalina Ortiz, Atalivar Oyuela, Ingrid Katherine Ramírez Ortiz, José Augusto Ramírez Ortiz y Jacob Oyuela Ortiz.

² Ello al interior del medio de control de reparación directa identificado con radicado: 73001-33-33-010-2021-00254-01.

³ Corte Constitucional. Sentencia T-658 de 2002.



Accionantes: David Zurisaday Oyuela Ortiz y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05129-00

5. En este orden, este despacho inadmitirá la tutela, para que, en los términos del artículo 17⁴ del Decreto 2591 de 1991 se allegue el poder especial otorgado por los accionantes al señor Ricardo Andrés Rodríguez Novoa y en el que conste, de forma expresa, la facultad conferida para el ejercicio de la presente acción constitucional.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

PRIMERO: INADMITIR la acción de tutela formulada por el señor Ricardo Andrés Rodríguez Novoa, actuando en calidad de apoderado judicial de los señores David Zurisaday Oyuela y otros.

SEGUNDO: CONCEDER el término de dos (2) días, computados a partir del día siguiente a la notificación de esta decisión, para que la parte actora allegue el poder especial otorgado al señor Ricardo Andrés Rodríguez Novoa en el que conste, de forma expresa, la facultad conferida para el ejercicio de la presente acción constitucional.

El escrito por medio del cual se subsane la demanda o los documentos que se pretendan incorporar con el mismo deberá efectuarse únicamente a través de la Ventanilla de Atención Virtual del aplicativo judicial SAMAI, disponible en el enlace <https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/>, opción «Solicitudes y otros servicios en línea: Consejo de Estado, Tribunales y Juzgados».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en

<https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx>

⁴ «ARTICULO 17. CORRECCION DE LA SOLICITUD. Si no pudiese determinarse el hecho o la razón que motiva la solicitud de tutela se prevendrá al solicitante para que la corrija en el término de tres días, los cuales deberán señalarse concretamente en la correspondiente providencia. Si no la corrigiere, la solicitud podrá ser rechazada de plano».